

estos contra aquellos, en cuanto sus acciones y obligaciones mutuas nacidas de sus contratos, para que los hagan valer ante quien corresponda, como y cuando les convenga.

No se les impone multa á los quejosos, por ser notoriamente pobres.

Devuélvase estas actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole copia de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 20 de 1874.—*Luis M. Aguilar.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Fernando García, contra el C. Juez de Letras de San Juan del Río, que le formó causa por portación de una pistola.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. Dr. en medicina Fernando García, ha sido procesado ante el juzgado de letras de San Juan del Río, por llevar consigo una pistola de seis tiros, de las conocidas bajo el nombre de cilindro ó *revólver*. Fué registrado el quejoso en persona y á petición de su contrario, durante un juicio verbal, que se celebraba en un juzgado de paz.

El art. 10 de la Constitución federal previene: que todo hombre tenga derecho de portar armas para su seguridad y legítima defensa; y agrega, que la ley señalará cuáles son las prohibidas y las penas en que incurrirán los que las portaren.

Por estas palabras de tiempo futuro: «señalará,» se viene en conocimiento de que la Constitución consideró inaplicables al tiempo presente, las prohibiciones establecidas en las diversas reales órdenes y cédulas, que se registran en el libro 12 tít. 19 de la Novísima Recopilación; siendo de notarse, que las pistolas y armas de fuego de cierto calibre, eran antiguamente de uso permitido, como puede verse en una pragmática de 1771, citada por Vilanova en su práctica crim. obs. 11. cap. 7. núm. 51.

Además de estas leyes, se observarán en esta materia en México, la providencia núm. 11 inserta en el tomo 29 de la Recopilación de Bclla, comunmente llamada «autos acordados;» así como también el bando de 13 de Enero de 1815. Por estas disposiciones se advierte la grande diferencia que habia entre portar armas prohibidas, y portar sin licencia las permitidas, y esto en tiempo del gobierno colonial.

En 23 de Noviembre de 1835, se publicó un bando que reconoce la misma distinción; pues reglamentaba para el Distrito Federal, el modo de pedir las licencias de armas. La suprema circular de 14 de Febrero del mismo año de 1835, dice hablando de los militares: «Llevarán consigo en todos los actos del servicio y asistencia de ley, las armas que les están concedidas, no pudiendo en ningún caso usar de las prohibidas.» De aquí se deduce, que las armas permitidas á los militares, lo están á los paisanos, previa la licencia respectiva; y que usando los primeros las pistolas de cilindro, comunmente llamadas *revólver*, es su uso permitido á los ciudadanos, previa la respectiva licencia. Las armas de munición, como propiedad del Estado, se exceptúan de esa regla, por distinto principio, á saber:

porque no solo en calidad de contrabando, pueden existir en manos de un paisano.

El artículo constitucional abolió las licencias, permitiendo á todos los ciudadanos y aun á todos los hombres, el uso de armas para su defensa; de donde haciendo la aplicacion debida, se deduce: que el ciudadano juez de San Juan del Rio, no pudo proceder al C. Dr. Fernando García, por la portacion de una arma, sin licencia que no necesitaba.

Además, siendo la costumbre el mejor intérprete de las leyes, y aun teniendo fuerza de ley, á ella debió estarse para no proceder contra el C. García; pues general es la costumbre de llevar consigo *revólver* los ciudadanos, y su venta se hace públicamente á ciencia y paciencia de la autoridad, en almacenes de armas y en las tiendas de mercería.

Como el art. 10 de la Constitucion deja para lo futuro la expedicion de la ley reglamentaria, y esta sea de la exclusiva competencia del Congreso de la Union, mientras esa ley no se expida, no puede hacerse distincion entre las armas prohibidas y las permitidas; pues hasta que distinga la ley, podrá el juez distinguir.

Así es que no pudo el ciudadano juez de San Juan del Rio, proceder contra el C. Fernando García, por portacion de arma prohibida.

La circular de 4 de Febrero de 1861, conseqüente con el texto constitucional, prohibió proceder al desarme de los ciudadanos, con la única excepcion: de recogerles las armas de municion, como pertenecientes al ejército nacional.

En el estudio constitucional sobre la soberanía de los Estados de la República mexicana, dice D. Isidro Montiel y Duarte, que «si en formal sentencia se hace alguna declaracion condenatoria por portacion de armas, tal declaracion es tambien una violacion de garantías» (cap. 8º). No solo como creó tan distinguido letrado, cuando hay sentencia; sino tambien cuando se

procede contra alguno, por ese motivo hay violacion de garantías; pues la razon que hay para no dar sentencia, tambien existe para no juzgar, si se atiende al art. 14 de la Constitucion. Como toque al juzgado, conocer de esta controversia, segun los arts. 97 fraccion 1ª, y 101 de la Constitucion tiene precision de dudarla; haciendo prevalecer la ley suprema, sobre los reglamentos inconducentes del Estado.

Por lo que el promotor fiscal pide: se conceda el amparo solicitado, por el Dr. D. Fernando García, mandándole devolver la pistola secuestrada.

Querétaro, Octubre 16 de 1874.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Octubre 29 de 1874.—Visto el presente recurso de amparo promovido por el C. Fernando García, contra el ciudadano juez de letras de San Juan del Rio, que le está formando causa por portacion de una pistola, con cuyo acto juzga el quejoso, se han violado en su persona las garantías que la Constitucion general otorga al hombre en sus arts. 14, 16 y 25.

Visto el informe rendido por el ciudadano juez de letras, como autoridad ejecutora del acto reclamado; los alegatos de las partes; la citacion para sentencia y lo mas que de autos consta.

Resultando: que del informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, consta á (fojas 8), que uno de los jueces constitucionales de la poblacion de San Juan del Rio, desarmó al quejoso y consignó el hecho al ciudadano juez de letras de dicha localidad, quien procedió á formar la causa respectiva, fundado en el decreto del Estado de 3 de Enero de 1872, y art. 142 de la ley de procedimientos.

Considerando: que en virtud del texto expreso del art. 10 de la Constitucion, todo hombre tiene derecho de portar armas para su propia seguridad, con la sola res-

traccion del no ser de las que la ley prohiba; que la ley que deba designar cuáles son las prohibidas, así como las penas que deba imponerse á los infractores de ella, aun no ha sido expedida por el Congreso de la Union, único competente para hacerlo, segun la fraccion 30 del art. 72 de la Constitucion; que no existiendo la ley reglamentaria del citado artículo, no puede considerarse como infraccion de ley la portacion de una pistola, y consecuentemente no puede formársele causa á un ciudadano sin vulnerar la garantía allí consignada.

Considerando: que la ley del Estado de 3 de Enero de 1872, en que se apoyó el ciudadano juez de letras para la formacion de la causa, no puede ser aplicada al caso, por haber sido promulgada en virtud de la facultad que á los gobernadores concedió la circular del ministerio de gobernacion de 2 de Diciembre de 1871, la que tuvo por origen las facultades extraordinarias de que se hallaba investido el supremo gobierno por el Congreso de la Union en 1º de Diciembre del mismo año de 1871, á causa del trastorno del orden público.

Que habiendo cesado las facultades concedidas al Ejecutivo de la Nacion, y estando en todo vigor la Constitucion general, cesó naturalmente la vigencia en el Estado de la ley de 3 de Enero de 1872, no pudiendo por lo mismo el juez de letras de San Juan del Rio, formar causa al quejoso por la portacion de una pistola, sin contravenir el art. 126 de la Constitucion, que previene á los jueces de los Estados, arreglen sus procedimientos á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados.

Considerando: que no existiendo causa legal para el procedimiento del ciudadano juez de letras de San Juan del Rio, se violó en el quejoso la garantía que le otorga el art. 16 de la Constitucion; así como el art. 18, por no habérsele podido privar de su li-

bertad, al no existir delito que merezca pena corporal, y haberlo intentado.

Por las razones expuestas, de conformidad con lo pedido por el ciudadano promotor fiscal y con fundamento de los arts. 14, 16, 18, 101 y 102 de la Constitucion general, debía fallarse y se falla:

Que la justicia de la Union ampara y protege al C. Fernando García, contra el acto del ciudadano juez de letras de San Juan del Rio, que le está formando causa por portacion de una pistola. Notifíquese, reponga la parte promovente el papel simple invertido por el del sello respectivo; sáquense las copias prevenidas por la ley, y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así en definitiva lo decretó el C. Juez de Distrito en el Estado y firmó. Doy fé.—*V. de la Peña*.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Es copia. Querétaro, Noviembre 8 de 1874.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 4 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Fernando García, contra el ciudadano juez de letras de San Juan del Rio, que le formó causa por portacion de una pistola, con cuyo acto cree el promovente que se han violado en su persona, las garantías consignadas en los arts. 14, 16 y 25 de la Constitucion federal. Visto el informe de la autoridad responsable: el parecer fiscal, la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: Que siendo la sola limitacion que la ley fundamental asigna al derecho de portar armas, la de que no puedan usarse éstas indistintamente, dejando al legislador la facultad de decidir cuales son las armas prohibidas; que no solo por la falta de ley orgánica en la materia, sino porque nada autoriza á considerar el arma llamada

revólver como prohibida, el hecho de impedir á un ciudadano el uso de dicha arma, es contrario á la Constitucion y por consiguiente han sido violadas en la persona del promovente, las garantías consignadas en el art. 10 del pacto federal.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de dicha Constitucion, se declara: Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia que dictó el Juez de Distrito, con fecha 20 de Octubre último, en la que amparó al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 14 de Enero de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el Lic. Agustin Obregon, como apoderado del presbítero D. Procopio Ocampo, contra los actos del jefe político de Leon y General Trisciliano Flores, que han ocupado en esa ciudad por disposicion del Ministerio de la Guerra, el edificio conocido con el nombre de Oratorio.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Agustin Obregon, como apoderado sustituto del Presbítero D. Procopio Ocampo, supuesto su estado, que es de alegar, dice: que en escrito de 19 de Marzo del presente año, se solicitó el amparo de la justicia federal, contra los procedimientos del ciudadano jefe político de Leon y del general en jefe de la primera brigada de la cuarta division, que por órden del ministerio de la Guerra, ocuparon una finca, sita en Leon, que se dice ser propiedad de D. Procopio Ocampo, violando en concepto del promovente, las garantías individuales, consignadas en los artículos 19, 16 y 27 de la Constitucion federal.

Al escrito de queja se acompañaron el poder que acredita la personalidad del Lic. Obregon, el testimonio del testamento extendido por el padre D. José Manuel Tinajero, segun el poder que le habia conferido el padre D. José Manuel Somera, una copia de una acta de un libro de la Congregacion de San Felipe, en la que consta que el día 24 de Agosto de 1858, fué electo Prepósito de la misma Congregacion, D. Procopio Ocampo, y una comunicacion del jefe político de Leon, trascribiendo otra de la jefatura de Hacienda, en la que se le decia al Sr. Ocampo, como encargado de la finca, ex-convento de los Felipenses, que entregara dicho edificio á la persona que se